

Asociación de Historia Contemporánea  
Actas del XIV Congreso

***DEL SIGLO XIX AL XXI. TENDENCIAS Y DEBATES***  
(Alicante, 20-22 de septiembre de 2018)

Mónica Moreno Seco (coord.)  
Rafael Fernández Sirvent y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (eds.)



**BIBLIOTECA VIRTUAL  
MIGUEL DE CERVANTES**  
[www.cervantesvirtual.com](http://www.cervantesvirtual.com)

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  
Alicante, 2019

Asociación de Historia Contemporánea. Congreso (14.º. 2018. Alicante)

*Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates: XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante 20-22 de septiembre de 2018 / Mónica Moreno Seco (coord.) & Rafael Fernández Sirvent y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (eds.)*

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 2019. 2019 pp.

ISBN: 978-84-17422-62-2

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019.

Este libro está sujeto a una licencia de “Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)” de Creative Commons.



© 2019, Asociación de Historia Contemporánea. Congreso

Algunos derechos reservados

ISBN: 978-84-17422-62-2

Portada: *At School*, Jean-Marc Côté, h. 1900.

# LA ORGANIZACIÓN DE LA CASA REAL DURANTE LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE BORBÓN: LA ALCAIDÍA

Cristina Bienvenida Martínez García  
(Universidad Rey Juan Carlos. Madrid)

En el discurso preliminar de presentación del proyecto que habría de convertirse en la Constitución de 1812 se declaraba enfáticamente que: «La falta de conveniente separación entre los fondos que la Nación destinaba para la decorosa manutención del Rey, su familia y casa, y los que señalaba para el servicio público de cada año, o para los gastos extraordinarios que ocurrían imprevistamente, ha sido una de las principales causas de la espantosa confusión que ha habido siempre en la inversión de los caudales públicos»<sup>2166</sup>.

Desde luego, las Cortes de 1812 en su capítulo V, titulado «De la dotación de la familia real», dejaba bien clara tal distinción. En los nueve artículos que componen dicho capítulo (arts. 213 al 221) se afirmaba reiteradamente que la dotación que se debía dar a la familia real era potestad de las Cortes: «Las Cortes señalarán al Rey la dotación anual de su casa, que sea correspondiente a la alta dignidad de su persona»<sup>2167</sup>. Seguidamente se definían los bienes que pertenecían al rey: «Pertenece al Rey todos los palacios reales que han disfrutado sus predecesores, y las Cortes señalarán los terrenos que tengan por convenientes reservar para el recreo de su persona» (art. 214). Asimismo, desgranaban quiénes y cuándo podían disfrutar de la dotación asignada a la casa real. En realidad, lo que promulgaron las Cortes de Cádiz con respecto a la organización y gasto de la Casa Real era consecuencia de la revolución política que se había producido en la estructura del nuevo Estado, en el que la Casa Real ya no cumplía la función que había venido manteniendo en la articulación política de la Monarquía desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII: el «modelo cortesano» que articuló la Monarquía desde la Casa Real durante la Edad Moderna, se regía por los principios de la filosofía política clásica (Aristóteles), que caracterizaba el gobierno del príncipe según los saberes y la conducta del *pater de familias* (*oeconomica*); esto es, se configuró a través de relaciones personales, que el monarca utilizaba para distribuir los oficios y mercedes en función del mérito o servicio que le prestaban sus súbditos. El modelo aristotélico evolucionó durante los siglos XVI y XVII, surgiendo una articulación política mucho más compleja, que se tradujo en formas institucionales de organización (Consejos, Tribunales, etc.)<sup>2168</sup>. Resultan interesantes las reflexiones que hizo el sociólogo P. Bourdieu, al relacionar la génesis del Estado con las normas que regían en la Casa Real: «Decir que la casa real tenía como política estrategias domésticas quiere decir que se describen como políticas cosas que no son políticas.

---

<sup>2166</sup> *Colección de Leyes Fundamentales*, ed. de SAINZ DE VARANDA, Zaragoza, 1957, p. 47. Un análisis de este discurso en Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA: *La Constitución de Cádiz (1812) y Discurso preliminar a la Constitución*, Madrid. Castalia 2002. Alberto RAMOS SANTANA: *Constitución política de la Monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo 1812, y Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la Comisión de Constitución el proyecto de ella*, Cádiz, Servicio de Publicaciones, Universidad de Cádiz, 2010.

<sup>2167</sup> Miguel ARTOLA y Rafael FLAQUER MONTEQUI: *La Constitución de 1812*, Madrid, Iustel, 2008, p. 107.

<sup>2168</sup> Antonio Manuel HESPANHA: «Representación dogmática y proyectos de poder», *La gracia del Derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 61-87, esp., pp. 66-68. D. FRIGO: *Il Padre di Famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizioni dell'economica tra cinque e seicento*, Roma, Bulzoni, 1985, pp. 31 ss.

Decir que las estrategias matrimoniales están inspiradas por la preocupación de perpetuar la casa es decir que la separación entre la familia real y el aparato del Estado no se ha realizado. El discurso de la «razón de Estado» como discurso de legitimación hace que intervenga el principio estatal para justificar las conductas del rey; la aparición de este discurso se funda en una ruptura con la lógica de la casa. En la medida que la lógica de la casa es una lógica ética, una moral»<sup>2169</sup>.

### **La ruptura del sistema tradicional de la Casa Real. Las reformas de Fernando VII**

Tras su retorno en 1814, Fernando VII desmontó la obra de las Cortes de Cádiz, declarando que tanto la Constitución (1812) como los Decretos acordados en ellas eran «nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos»<sup>2170</sup>. Por lo que se refería a la Casa Real, al poco de llegar el rey nombró un nuevo mayordomo, el conde de Miranda, que no había estado vinculado al gobierno de su padre (los mayordomos de Carlos IV habían sido el marqués de Mos y el duque de San Carlos)<sup>2171</sup> y seguidamente promulgó un Reglamento, aprobado el 17 de mayo 1815<sup>2172</sup>, en el que mantenía la separación entre los asuntos de la Casa de los del resto de la Administración del Estado<sup>2173</sup>. Dicho Reglamento venía a ser *la culminación* de la obra organizativa iniciada con *los Reales Decretos de 22 de mayo de 1814 y 9 de agosto de 1815* dictados exclusivamente para el curso y dirección de los negocios de la Real Casa<sup>2174</sup>.

La separación entre la Casa Real y la administración del Estado ponía de manifiesto el nuevo concepto de Casa Real que se había producido, cuya función se limitaba a ser un organismo del nuevo Estado, con una economía dependiente de él<sup>2175</sup>. En adelante, la Casa Real fue un organismo del nuevo Estado liberal, por lo que era forzoso la readaptación o supresión de los departamentos que componían la tradicional Casa Real (y los que conservaron el nombre, su contenido y función eran distintos a los que habían ejercido en los siglos anteriores), así como la separación de los bienes de la nación de los personales del monarca (propiedades y sitios reales), formando, a partir

---

<sup>2169</sup> Pièrre BORDIEU: *Sobre el Estado*, Barcelona, Anagrama, 2014, p. 343. También resulta interesante, ÍD., «De la maison du roi à la raison d'état. Un modèle de la genèse du champ bureaucratique», *Actes de la recherche en sciences sociales* 118 (1997), pp. 55-60.

<sup>2170</sup> «Manifiesto del Rey» de 4 de mayo de 1814 (*Decretos del Rey don Fernando VII*, por don Fermín MARTÍN DE VALMASEDA, 1818, I, p. 8).

<sup>2171</sup> María Dolores Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ: «El tránsito de la Casa de Fernando VII a la de Isabel II: la Junta de Gobierno de la Casa Real y Patrimonio (1815-1840)», en: María Dolores Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ (coord.), *Corte y Monarquía en España*, Madrid, 2003, en los apéndices presenta los *curricula* de todos los Mayordomos mayores de la casa real de Fernando VII.

<sup>2172</sup> María Dolores Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ: «La nueva planta para la Casa Real de Fernando VII: El Desconocido Reglamento de 17 de noviembre de 1815», *Cuadernos de Historia Moderna* (2003), Anejo II, pp. 311-343.

<sup>2173</sup> Ángel MENÉNDEZ REXACH: «La separación entre la casa del rey y la administración del Estado (1814-1820)», *Revista de Estudios políticos* 55 (1987), pp. 55-121.

<sup>2174</sup> Estos Decretos se recogen en la *Colección de "Decretos del Rey Don Fernando VII"*, por D. Fermín Martín de Balmaseda, Madrid, 1818, I, p. 20 (R.D. 22 mayo 1814) y II, p. 549 (R.D. 9 agosto 1815), citados por Ángel MENÉNDEZ REXACH: *La jefatura del Estado en el derecho público español*, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Derecho (tesis doctoral), 1978, I, p. 256.

<sup>2175</sup> Encarna y Carmen GARCÍA MONERRIS: «Monarquía y patrimonio en tiempos de Revolución en España», *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 16 (2013), p. 2.

de entonces, el organismo denominado «Real Casa y Patrimonio» dentro del Estado, para lo que se crearon nuevos organismos que debían administrarlo<sup>2176</sup>.

Aunque Fernando VII estableció el absolutismo, la ruptura que se había producido entre la economía de la Real Casa y del resto de la Monarquía hizo imposible restaurar la organización de la Casa tradicional, por lo que tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias y crear organismos (por lo general unipersonales) de acuerdo a las nuevas funciones que debía cumplir<sup>2177</sup>. En este sentido resulta lógico que el Mayordomo mayor fuera proclamado el oficio de mayor importancia y más adecuado para una Casa sin autonomía económica, que ya había perdido su fuerza como centro desde donde se organizaba políticamente la Monarquía. Junto con la consolidación del Mayordomo, como primer oficial de la Casa, hubo una supresión de otros organismos que la habían gobernado en siglos anteriores, al mismo tiempo que se crearon otros de acuerdo con la función que iba a desempeñar en el nuevo Estado.

Aunque explicar esta transformación institucional requiere un espacio mayor del que dispongo en este trabajo, es preciso destacar la supresión de la *Junta de Bureo*, cabeza de la administración de la Casa de Borgoña y que había existido desde el siglo XVI hasta el XIX<sup>2178</sup>. Las actividades de los dos cargos más significativos y de mayor autoridad que tenía dicha Junta, *Contralor* y *Grefier*, fueron asumidas por la Secretaría de la Mayordomía Mayor y por la Contaduría y Tesorería, así como por las oficinas de la nueva planta como la Veeduría general y el Archivo. El 22 de mayo 1814, el Mayordomo mayor escribía a don Peregrino Llanderal «... le comunico de real orden para su noticia en la inteligencia de que con motivo de haber determinado S. M. suprimir la oficina de *Contralor general*, debe v. m. cesar en el ejercicio de las funciones de tal y hacer entrega de los papeles de este ramo al archivero general de la real casa, a quien con esta fecha paso la orden correspondiente». Un mes después, el 15 de junio 1814, nombró *Archivero general* de la real casa, capilla, cámara, caballeriza y real patrimonio con la dotación de 30.000 rls. anuales a don Ignacio Pérez «en atención a sus dilatados servicios, a su buen desempeño en los destinos que ha obtenido, y a la conducta patriótica que ha observado durante la permanencia de los Franceses en España». Siempre se ha considerado el año 1814 como la fecha de creación del Archivo General de la Real Casa y Patrimonio, hoy Archivo General de Palacio<sup>2179</sup>. De hecho, el 27 junio 1814, Fernando VII hizo los primeros nombramientos de los oficiales del Archivo de la Casa Real<sup>2180</sup>. Con todo, es preciso señalar que durante el reinado de José I el archivo ya tomó forma como se demuestra en el Reglamento de la Casa Real de 23 de septiembre 1808, en el que, por primera vez, se utilizó la denominación de *Archivo de la Corona*<sup>2181</sup> para designar la oficina donde se reuniría toda la documentación relacionada con el personal, las dependencias de la Casa Real y

---

<sup>2176</sup> Francisco COS GAYÓN: *Historia jurídica del Patrimonio Real*, Madrid 1881, pp. 150-151.

<sup>2177</sup> Vanesa BENITO ORTEGA, Isabel GARZÓN, Juan Antonio GONZÁLEZ, y María del Mar MAIRAL: «La Jefatura de Oficios y Aposentamiento de la Real Casa y Patrimonio (1814-1931)», *Reales Sitios*, n.º 174 (2007), p. 48.

<sup>2178</sup> José MARTÍNEZ MILLÁN y José Eloy HORTAL MUÑOZ (dirs.): *La Corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración de la Monarquía católica*, Madrid, Polifemo, 2015, I, Cap. 1.º. *La Junta de Bureo*.

<sup>2179</sup> Carmen MAGÁN MERCHÁN y María del Mar MAIRAL DOMÍNGUEZ: «Los orígenes del Archivo General de Palacio. El Archivo durante la Guerra de la Independencia», *Revista de Asociación de Archiveros de la Comunidad de Madrid* 3 (2008), pp. 92-113; José de GÜEMES Y WILLAME: *Historia del origen y vicisitudes del Archivo de la Corona desde su creación en 1814 hasta 1868*, Archivo Histórico Nacional, Códices, libro 580. Margarita GONZÁLEZ CRISTÓBAL: «Los orígenes del Archivo General de Palacio», *Arbor*, 169 (2001), pp. 267-288.

<sup>2180</sup> AGP. Registro 5710, fol. 2r., fechado en 27 junio 1814.

<sup>2181</sup> Margarita GONZÁLEZ CRISTÓBAL: «Los orígenes del Archivo General de Palacio», *Arbor*, 169 (2001), p. 268.



las diferentes administraciones del Patrimonio de la Corona<sup>2182</sup>. En el Reglamento General de la Casa Real y de todas sus dependencias, dispuesto por Fernando VII en 23 de diciembre de 1817, aparecía detallada la planta del *archivo* y sus respectivos salarios<sup>2183</sup>.

La creación de nuevos cargos y la supresión o modificación de las instituciones anteriores produjo numerosos desencuentros y malentendidos, por lo que el rey se veía obligado a detallar la prelación y funciones de los nuevos oficios. En el artículo XX del Reglamento de 16 noviembre 1822<sup>2184</sup> establecía el orden de prelación entre dichas dependencias y se esforzaba por entroncar la continuidad de los nuevos cargos con los desempeñados en las instituciones existentes en reinados anteriores<sup>2185</sup>. Con todo, la transformación institucional que realizó Fernando VII en la nueva Real Casa durante sus primeros años de reinado, consistió en reformar el oficio de *Mayordomo mayor* y en la creación de un nuevo oficio, el de *Veedor*.

La autoridad y poder del Mayordomo mayor quedaba clara en el artículo 1.º del Reglamento de la Casa Real de 1818<sup>2186</sup>. Junto al Mayordomo mayor se creó la *Secretaría de la mayordomía*. Por otro Decreto de 9 de agosto de 1815 se implantó también una *Junta Gubernativa* compuesta por el *mayordomo* como presidente, del *secretario*, *contador*, *tesorero*, *asesor* y *fiscal*, para discutir todos los asuntos de la Real Casa y Patrimonio<sup>2187</sup>, al mismo tiempo que elegía a los personajes que iban a ocupar dichos cargos<sup>2188</sup>. En el decreto fundacional se establecieron las competencias de la *Junta Gubernativa* y en las ordenanzas posteriores su composición y actuación<sup>2189</sup>. Sus competencias principales eran asesorar al mayordomo, examinar los cambios de reglamentación e instruir los expedientes al mayordomo<sup>2190</sup>. Paralelamente a la *Secretaría de la mayordomía* y a la *Junta Gubernativa* (que consultaba todos los asuntos relativos a la dirección de la Casa), aparecieron otro tipo de Juntas e instituciones que no estaban bajo la jurisdicción del Mayordomo mayor, sino que recordaban el carácter de jurisdicción especial que siempre habían tenido los servidores de la Casa Real y, otras, sirvieron para ayudar a la adaptación de la vieja Casa Real a la nueva: para solucionar los problemas ocasionados con la separación de los bienes del rey y los bienes del reino (que comenzaron a diferenciarse a partir de las Cortes de Cádiz) surgió la *Junta suprema patrimonial de apelaciones*<sup>2191</sup>. También es preciso mencionar el *Juzgado de la real casa*

---

<sup>2182</sup> Juan José ALONSO MARTÍN y María del Mar MAIRAL DOMÍNGUEZ: «Fondos documentales del Archivo», pp. 52-53.

<sup>2183</sup> AGP, Registro 5710, fol. 1r.

<sup>2184</sup> *Reglamento de la Real Casa*, Madrid, Imprenta León Amarita, 1822.

<sup>2185</sup> AGP, Registro 5710, fol. 2r.

<sup>2186</sup> Ángel MENÉNDEZ REXACH, «La separación entre la casa del rey y la administración del estado (1814-1820)», *Revista de Estudios Políticos. Nueva época*, núm. 55 (1987) p. 105.

<sup>2187</sup> Ángel MENÉNDEZ REXACH, *La jefatura del Estado en el Derecho público español*. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid (tesis doctoral) 1978, I, 465 ss.; María del Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ, «El tránsito de la casa de Fernando VII a la de Isabel II: la Junta de Gobierno de la Casa Real y Patrimonio (1815-1840)», en: María del Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Coord.), *Corte y Monarquía en España*. Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces 2003, pp. 29-66.

<sup>2188</sup> AGP, Registro 5710, fols. 10r.-12r.

<sup>2189</sup> AGP, Administración General, leg. 850, *Ordenanza de la Junta de Gobierno y de la Suprema de Apelaciones de la Real Casa y Patrimonio*, 8 marzo 1817.

<sup>2190</sup> María del Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ: «El tránsito de la casa de Fernando VII a la de Isabel II: la Junta de Gobierno de la Casa Real y Patrimonio (1815-1840)», pp. 47-48.

<sup>2191</sup> Emilio DE BENITO: «La Junta Suprema de apelaciones de la Real Casa y Patrimonio», en: *Homenaje al profesor A. García Gallo*, Madrid, 1996, II/1, pp. 19-41. La *Junta de Apelaciones* fue suprimida en 1820, con el Trienio liberal, pero volvió a imponerse en 1823. Ángel MENÉNDEZ REXACH: «La separación entre la casa del rey y la administración del estado (1814-1820)», *Revista de Estudios Políticos. Nueva época*, núm. 55 (1987), p. 96.

y patrimonio<sup>2192</sup>, precisamente como vestigio de las peculiaridades que venían del pasado y habían existido en otros diversos ramos, pero la separación entre la Casa Real y la Administración del Estado favoreció que perdurasen en aquélla, en un contexto en que los servidores de la Casa Real aún no se habían integrado plenamente en la administración del Estado y se regían por normas especiales<sup>2193</sup>.

Con todo, el cargo nuevo y original que se creó, el 2 de junio 1814, por voluntad expresa de Fernando VII fue la *veeduría general* de la Real Casa, Capilla y Cámara. El veedor, bajo cuyo mando comenzaron a actuar todos los jefes de los oficios que componían la servidumbre regia, se convirtió en el eslabón de la cadena de mando entre los jefes de cada oficio y su superior, el Mayordomo Mayor. El artículo 46 del reglamento de 1817 establecía que «Todos los jefes de los oficios de mi Real Casa deberán estar a las inmediatas órdenes del veedor para poner en ejecución cuantas éste reciba de mi mayordomo mayor y ninguno de los dichos jefes podrá hacer la menor innovación en lo gubernativo de su oficio sin dar parte al veedor y éste a mi mayordomo mayor para su resolución».

Antes de la aparición de la *Veeduría General*, los Jefes de cada oficio despachaban directamente con el Mayordomo Mayor en los asuntos relativos al gobierno de sus respectivos oficios; y con el Contralor, en los de carácter económico-administrativo, siempre con la aprobación del primero. Así se refleja en el reglamento general de 1761, promulgado por Carlos III<sup>2194</sup>. El cargo de *veedor general* recayó en Ignacio Gutiérrez Solana, quien desarrolló su vida en los servicios palatinos ya que comenzó en los escalones más bajos hasta alcanzar dicho cargo<sup>2195</sup>. Gutiérrez fue el único veedor, pues el cargo desaparecía en 1834, al ser absorbido por la *Alcaidía* desde el mismo momento de su creación y, posteriormente, por la *Inspección General*<sup>2196</sup>.

## **La reforma de la Casa en tiempos de la regencia de María Cristina. La creación de la Alcaidía**

Fernando VII murió el 29 septiembre 1833. Al día siguiente, la Reina Gobernadora nombraba al marqués de Valverde mayordomo mayor de Isabel II (menor de edad) y el 30 septiembre confirmaba a los jefes de la Casa que habían servido en tiempos de su marido<sup>2197</sup>. No obstante, bajo esta aparente normalidad, María Cristina inició una profunda reforma de la Real Casa motivada, sin duda, por la desconfianza que tenía con los servidores de palacio, dado que (como le informaba el jefe de policía a través del Mayordomo) la mayor parte de ellos no eran de su tendencia política, sino de don Carlos. Es decir, a la muerte de Fernando VII no solo se cambió de estructura la casa, sino que se llevó a cabo una auténtica purga de servidores fernandinos para colocar a los que eran partidarios de la Reina Gobernadora. Comenzó por sustituir los administradores del patrimonio

---

<sup>2192</sup> «Reglamento que para el régimen y gobierno de la Real Casa mandó el Rey Ntro. Señor que se observase por su Real Decreto de 16 de noviembre de 1822 y es como sigue». AGP, Administración General, leg. 942.

<sup>2193</sup> Ángel MENÉNDEZ REXACH: *La Jefatura del Estado...*, pp. 464 ss. Ángel MENÉNDEZ REXACH: «La separación entre la casa del rey y la administración del estado (1814-1820)», p. 107.

<sup>2194</sup> AGP, Administrativa General, leg. 939, exp. 59.

<sup>2195</sup> AGP, Personal, caja 493, exp. 2.

<sup>2196</sup> Vanesa BENITO, Isabel GARZÓN, Juan Antonio GONZÁLEZ, y María del Mar MAIRAL: «La Jefatura de Oficios y Aposentamiento de la Real Casa y Patrimonio (1814-1931)», *Reales Sitios*, núm. 174 (2007), p. 55.

<sup>2197</sup> AGP, Registro 5710, fol. 188v.

real en los diferentes reinos; así, el 5 de abril de 1834 se escribía al Bayle general del Real Patrimonio de Valencia: «S.M. la Reina Gobernadora en nombre de su augusta hija, la reina D.<sup>a</sup> Isabel segunda, ha tenido a bien separar de sus destinos a D. Vicente Climent y D. Vitoriano Morera, asesor y fiscal de la Bailía General del Real Patrimonio de ese Reino, y nombrar para asesor a D. Vicente Valor, abogado y catedrático que fue de esa Universidad literaria, y para fiscal a D. Pascual Cuenca, abogado, en atención a los méritos y decidida adhesión a S. M.»<sup>2198</sup>. El cambio siguió con el personal del ramillete y de la cocina, al que se le exigió tener un nuevo reglamento que definiese su servicio. No obstante, la renovación completa de los servidores de la Real Casa se produjo al año siguiente, cuando se realizó la expulsión (bien por ideología o bien por jubilación) sustituyéndolos por otros nuevos, favorables a la nueva Monarquía<sup>2199</sup>.

Tan profunda renovación del servicio fue acompañada por la reforma de la planta de la Real Casa: varios organismos fueron reestructurados y se crearon otros nuevos: se dio nueva fisonomía a la *Secretaría del Despacho de la Mayordomía Mayor* con arreglo a las reales órdenes de 15 y 16 de enero de 1834 y el real decreto de 3 de febrero, mientras que se restauraba la *Junta de Gobierno de la Casa Real* por decreto de 12 marzo 1834<sup>2200</sup>. No obstante, el cambio más profundo consistió en la supresión de la *veeduría general* de la Real Casa, Capilla y Cámara (el 3 de septiembre 1834), bajo cuyo mando directo venían actuando todos los jefes de los oficios que componían la servidumbre regia, con el pretexto de incompatibilidad con el nuevo orden administrativo. Once días después se decidía que cada uno de los oficios quedase bajo la supervisión de su respectivo jefe en lo referente al gobierno del mismo, mientras que, en lo económico, todos los negocios pasaban a la *Contaduría*<sup>2201</sup>.

Para coordinar estas dos partes en que se estructuraba la Real Casa (la política y la económica), la soberana decretaba la creación de la *Alcaldía*<sup>2202</sup>. La razón de su creación aparecía expresada con claridad al comienzo de las ordenanzas que se le dieron: «centralizar en la Mayordomía Mayor todas las dependencias de la Real Casa y que las diversas atribuciones confiadas al Conserje aposentador del Real Palacio de Madrid sean despachadas por personas de toda mi confianza»<sup>2203</sup>. El 9 de noviembre de 1834, el Mayordomo mayor transmitía a los jefes de las secciones de la Casa Real el Real Decreto siguiente, de parte de la Reina Gobernadora: «El empleo de Conserje del Real Palacio de esta corte queda abolido y en su lugar se nombrará un Alcayde principal del Real Palacio» (art. 1.º)<sup>2204</sup>. Asimismo «No reconocerá más jefe que al Mayordomo mayor de quien dependerá inmediatamente y solo obedecerá las órdenes que yo le comunicare si lo tuviere a bien o las que reciba por conducto del Mayordomo mayor» (art. 9.º). Al día siguiente nombraba a Francisco Carlos de Cáceres Alcaide de Palacio por su «adhesión y fidelidad a su Real persona»<sup>2205</sup>. A partir de entonces, el *Alcaide* se convirtió en una de las principales figuras de la

---

<sup>2198</sup> *Ibid.* Francisco COS-GAYÓN: *Historia jurídica del Patrimonio Real*, Madrid, 1881, pp. 122-130.

<sup>2199</sup> AGP, Reinados, Fernando VII, caja 11, exp. 1.

<sup>2200</sup> AGP, Reinados, Isabel II, leg. 14, núm. 1; AGP, Administración General, leg. 850.

<sup>2201</sup> Vanesa BENITO, Isabel GARZÓN, José Antonio GONZÁLEZ, y María del Mar MAIRAL: «La Jefatura de Oficios y Aposentamiento de la Real Casa y Patrimonio (1814-1931)», *Reales Sitios*, núm. 174 (2007), p. 50. AGP, Reinados, Isabel II, caja 345, exp. 4.

<sup>2202</sup> AGP, Administración General, leg. 408.

<sup>2203</sup> AGP, Isabel II, leg. 345. «Lo que traslado a V. de Real Orden para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca. Palacio 14 septiembre 1834. El marqués de Valverde».

<sup>2204</sup> AGP, Isabel II, leg. 345. Real Sitio del Pardo, a 9 noviembre 1834.

<sup>2205</sup> AGP, Administración General, leg. 408. Madrid, 11 de noviembre de 1834. Francisco Carlos de Cáceres al excelentísimo señor mayordomo mayor de S.M.



corte como especifican las *atribuciones del empleo de Alcaide del Real Palacio*, ordenadas por María Cristina al mismo tiempo que nombraba Alcaide general D. Francisco Carlos Cáceres<sup>2206</sup>:

Primero: el empleo de conserje aposentador del real palacio de esta corte, queda abolido, y en su lugar se nombrará un alcaide principal del real palacio.

Segundo: el conserje aposentador don Luis Veldrof queda sujeto a la jubilación que me reservo señalarle con arreglo al plan que me propondrá la junta de gobierno de la real casa.

Tercero: el destino de alcaide principal como que es de la mayor confianza, tendrá anejas las consideraciones de secretario de S. M. y gentil hombre de casa y boca y el que lo desempeñare será individuo de la junta de gobierno de la misma, en cuya sesiones y en todos los actos donde esto concurra, tomará asiento después del tesorero general, y gozará el sueldo de veinte y seis mil reales anuales.

Cuarto: tendrá a sus inmediatas órdenes todos los oficios de la real casa, al llavero, aguadores, casilleros, porteros de galerías, de cadena y de damas, faroleros, relojeros de la real casa y facultativos de familia.

Quinto: cuidará de que todos los empleados de su inmediata dependencia cumplan con fidelidad y exactitud los cargos que les están cometidos y dará parte al mayordomo mayor de cualquiera falta que notara, proponiéndome éste el modo de remediarla.

Sexto: cuidará de formar la nómina mensual de todos los empleados de su dependencia que remitirá a la contaduría general de la real casa con la oportunidad conveniente, anotando las bajas que hubiere, y dando parte al mayordomo mayor, así que ocurran, para que lo eleve a mi noticia.

Séptimo: acompañará al mayordomo mayor a la revista de los oficios de la casa y cuidará al propio tiempo de que en todos estos, se hallasen corrientes los inventarios de los efectos existentes en los mismos, pasando una copia a mayordomía, conservando otra en su poder y anotando la salida de los efectos, de la que dará parte para el descargo correspondiente.

Octavo: estará a su cuidado todo lo concerniente a la policía interior del real palacio, pasará revista a todos los dependientes subalternos las veces que lo crea oportuno, y suspenderá del destino al empleado que cometa alguna falta, que merezca este castigo, dando parte al mayordomo mayor»<sup>2207</sup>.

Sin duda ninguna, las competencias del Alcaide eran muy amplias y diversas, por lo que, el 10 de noviembre de 1834, la Reina Gobernadora le ordenaba que formase un equipo de personas que estimase necesarias para que le auxiliaran en el despacho de la alcaidía principal del Palacio, procurando conciliar la exactitud del servicio con la economía que Su Majestad quiere que se observe en todos los ramos de su Real Casa». A continuación expongo la planta de oficiales de la Alcaidía en la fecha de su creación y los cambios que se produjeron en la reforma de 1838<sup>2208</sup>.

---

<sup>2206</sup>AGP, Administrativa General, legajo 408. «Queriendo centralizar la mayordomía mayor todas las dependencias de la real casa y que las diversas atribuciones confiadas al conserje aposentador, del real palacio de Madrid, sean despachadas por persona de toda mi confianza y que reúna al mismo tiempo la capacidad y adhesión necesarias a un empleado distinguido y con servicio inmediato a la real persona, he venido en nombre de mi muy querida hija en decretar lo siguiente».

<sup>2207</sup>«Real sitio del Pardo 9 de noviembre de 1834. Yo la Reina Gobernadora, al marqués de Valverde Mayordomo Mayor». Palacio 10 de noviembre de 1834. El Marqués de Valverde. AGP, Administrativa General, leg. 408.

<sup>2208</sup>AGP, Administración General, leg. 409. La planta de la Alcaldía en el año 1838, se puede ver en: AGP, Administración General, leg. 942 «*Planta de los individuos de la alcaidía principal del real palacio y sus dependencias, número de empleados que había y sueldos que tenían a la creación de la misma, los que actualmente*

El motín de la Granja (1836) hizo templar el sistema político que se estaba implantando<sup>2209</sup> y - sin duda- también afectó a la estructura de la Real Casa que se estaba creando para insertarla en dicha organización estatal, por lo que la Reina Gobernadora aceleró la reforma de la Real Casa, fijando unas estructuras que iban a perdurar por largo tiempo:

El 26 de diciembre de 1837, el *Contador general*, que empezaba a convertirse de hecho en el eje de la organización dirigió un escrito al Mayordomo mayor denunciando la escasa vigencia de los Reglamentos anteriores por las muchas variaciones introducidas y quejándose de que tales cambios hacía muy difícil la labor de la Contaduría general, por lo que el Mayordomo mayor solicitó a los Jefes de los oficios de la Casa información del estado de sus respectivos oficios con el objetivo de realizar un nuevo Reglamento que permitiese una mayor centralización y control de los servidores.

Es por lo tanto de absoluta necesidad el que se formen nuevos reglamentos en los que de una manera explícita se fije definitivamente el número de empleados de que cada uno debe componerse, los sueldos que cada uno ha de disfrutar, las facultades que ha de ejercer, el modo con que ha de hacerlo y las diligencias que debe cumplir. Entonces, solo así podrá la Contaduría corresponder al principal y acaso único objeto de su instituto y proponer el remedio de los males y daños que a S. M. puedan originarse. De otra suerte, la contaduría habrá de proceder sin datos, sus dictámenes serán discrecionales y a cada paso incurrirá, aunque a la mejor buena fe, en desaciertos y errores que ora perjudicarán a los Reales intereses, ora a los de las personas cuyos actos se hace; extremos ambos que a todo trance debe evitar la imparcial acción fiscal que ejerce. La necesidad de la formación de tales reglamentos es común, pero para la Contaduría es más urgente la del general de la Real Casa, Cámara, Capilla y Caballerizas porque estas dependencias son las que más reformas han sufrido y porque con ellas tiene que entenderse más inmediata y directamente aquella oficina<sup>2210</sup>.

El Reglamento fue revisado por la Junta de Gobierno y, después de modificarlo, se elevó a la consideración de la Regente<sup>2211</sup>, quien ordenó, en primer lugar, que «en lo sucesivo corriesen separadas y ejercidas por distintas personas las funciones de etiqueta y ceremonia de palacio, y las económico-administrativas de la Real casa y patrimonio y todas sus dependencias, tuvo a bien decretar el 10 de junio siguiente, que los jefes de la casa, cámara y caballerizas no tuviesen en adelante más facultades ni ejercitasen más funciones que las primeras, que de las segundas se encargasen las personas que V. M. nombraría con el título de Intendente general de la Real Casa y Patrimonio, y bajo su entera dependencia el Director general que igualmente había de nombrarse para las Reales Caballerizas».

Seguidamente, promulgó un nuevo decreto en el que tras insistir en la «separación que debe existir entre las funciones de etiqueta y ceremonia de palacio y las económico-administrativas de la real casa y patrimonio», ordenaba hacer los reglamentos respectivos de los empleados de la Real Casa, Patrimonio y Sitios Reales, determinando las atribuciones y facultades del jefe principal de la administración, o sea el Intendente general, modo de ejercerlas, reglas y obligaciones que cada cual de los dichos empleados en la parte económico-administrativa había de guardar y cumplir.

---

*hay y sueldos que disfrutaban y los que propongo, deben quedar en lo sucesivo, con demostración de las diferencias que resultan por todos los conceptos [1838]».*

<sup>2209</sup> AGP, Reinados, Fernando VII, caja 32, exp. 13. Alejandro GÓMEZ: *Los sucesos de la Granja en 1836. Apuntes para la Historia*, Madrid, Imprenta de Manuel de Rojas, 1864, pp. 18-20 y 36-39.

<sup>2210</sup> AGP, Administración General, leg. 942.

<sup>2211</sup> AGP, Administración, leg. 942.

Ello conllevó la aprobación de las plantas de empleados que ha de haber en la mayor parte de los ramos y dependencias y de los sueldos que han de disfrutar<sup>2212</sup>.

Las funciones de gobierno y administración se centralizaron también en el Intendente general, que iba a convertirse en la figura clave. A sus órdenes se situaba una numerosa lista de empleos, entre los que cabe destacar por la importancia de sus funciones: el Contador general, el Tesorero, el Alcaide de Palacio, el Consultor, el Abogado, el Secretario de la Intendencia y el Archivero.

La separación de los bienes patrimoniales del Rey de los bienes del Reino llevó a delimitar las propiedades de uno y otro, lo que permitió la venta de los bienes, para lo que la Junta tuvo que fijar reglas exactas y uniformes para celebrar las subastas «que se ofrecen tanto en las dependencias de la corte como en las administraciones patrimoniales, cuyo encargo le tenía V. M. encomendado por real resolución de 10 de diciembre de 1835 y en su cumplimiento ha incluido en el proyecto dos títulos sobre la materia»<sup>2213</sup>. Para vigilar este proceso, la Junta proponía crear la figura de un visitador general del Real Patrimonio.

Finalmente, una vez establecida la composición y estructura de la nueva Casa Real, la *Junta de Gobierno* consideró conveniente cambiar su nombre por el de *Junta Consultiva* alegando que gobernar y administrar son actos de una persona sola, que no se ejercen bien por las corporaciones y que a esta Junta le competían más los de discutir, deliberar y aconsejar. Es decir, la *Junta Consultiva*, vendría a ser el «consejo doméstico de la reina» para los asuntos de gobierno y administración de su casa y patrimonio, por lo que dada la importancia del servicio que iban a seguir prestando sus componentes, se recomendaba a la Regente que les concediese seguir disfrutando de honores y dignidades análogos que siempre habían disfrutado<sup>2214</sup>.

En base a ellos se elaboró el general que se convirtió en la "Ordenanza general para el Gobierno y Administrativo de la Real, que fue aprobada el 29 de mayo de 1840. Se trata de un auténtico código que regula la organización de la Casa Real y los derechos y deberes de sus empleados, pero, además, detalla con sorprendente minuciosidad todo el régimen jurídico administrativo de la actividad. Por lo que respecta a la Alcaldía, los artículos que definían sus competencias eran los siguientes (cito los primeros por la importancia que tienen):

---

<sup>2212</sup>“S. M. la Reyna Gobernadora se ha servido dirigirme con esta fecha el Real decreto siguiente: «Queriendo yo que en lo sucesivo corran separadas y ejercidas por distintas personas las funciones de etiqueta y ceremonia de palacio y las económico-administrativas de la Real Casa, Patrimonio y todas sus dependencias, vengo en decretar lo siguiente: 1.º: El Mayordomo mayor, Sumiller de Corps y Caballerizo mayor no tendrán en adelante más facultades ni ejercerán más funciones que las concernientes a la etiqueta, ceremonia y servicio de las Reales Personas, así en la Cámara como fuera de Palacio con sujeción a lo que se estableciere en los reglamentos que para ello se formaren. 2.º: De las facciones económico-administrativas se encargará la persona que yo nombrare con título de Intendente general de la Real Casa y Patrimonio. 3.º: Con las de igual clase de las Reales Caballerizas y con entera dependencia de aquel, correrá el sujeto que con la denominación de director general de las Reales Caballerizas tuviere yo a bien nombrar. 4.º: La Junta de Gobierno de la Real Casa podrá en armonía con estas disposiciones los reglamentos de cuya formación esté encargada, así como los formados ya, que elevo a mis reales manos con consulta de 20 de mayo último, teniendo presentes en cuanto algunos de estos últimos las observaciones que acerca de ellos he hecho y de que estaréis enterado» (*Ibid.*)

<sup>2213</sup>Encarna y Carmen GARCÍA MONERRIS: «Monarquía y patrimonio en tiempos de Revolución en España», *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 16 (2013), p. 2-8. V. BRANCHAT: *Tratado de los derechos de regalías que corresponden al Real Patrimonio en el reyno de Valencia y de la jurisdicción del intendente como subrogado en lugar del antiguo Bayle General*, Valencia, 1786, III, pp. 206-208.

<sup>2214</sup> AGP, Administración, leg. 942. Palacio, 14 de febrero de 1840.

### «Alcaldía principal del Real Palacio

- Artículo 1.º:** Esta oficina fue creada por Real Decreto de 9 de Noviembre de 1834 tiene a su inmediatas órdenes, todo los oficios de la Real Casa como son: el de furriera, tapicería y guardamuebles, al llavero, a los barrenderos, relojeros de la real Casa y facultativos de Familia.
- Artículo 2.º:** Está hecha cargo igualmente de la china, loza, cristal y mantelería de las vajillas de plata y del alumbrado de cera, que antes estaba a cargo del jefe de ramillete.
- Artículo 3.º:** Lo estará también de la leña y el carbón que considere necesario para la real Servidumbre, dando parte al excelentísimo señor Mayordomo Mayor para la resolución conveniente.
- Artículo 4.º:** Las obras de albañilería, fontanería y carpintería de este Real Palacio.
- Artículo 5.º:** El real Gabinete de física y sus dependencias.
- Artículo 6.º** El teatro Real por Real Orden de 6 de enero de 1835.
- Artículo 8.º:** Posteriormente han sido agregados a la alcaldía: el Real oficio de guardajoyas, por decreto de 10 de enero de 1836.
- Artículo 9.º:** La dirección de la Real fábrica de gas, en virtud de ora Real Orden de 15 de agosto de otro año»<sup>2215</sup>.

Además, el Alcaide tenía a su cargo las llaves de Palacio y de las reales habitaciones. Se encargaba del servicio extraordinario de la mesa y del aparato de los actos públicos de la reina, tales como contratos matrimoniales, bautizos de personas reales, recibimiento de embajadores y cardenales, condecoración del toisón de oro y grandes cruces, etc. asimismo, asumió las funciones del aposentador de palacio, al asignarle el poder de distribuir las habitaciones del personal que vivía en palacio, incluso de la portería de Damas. Finalmente, se ocupaba de formar la nómina mensual de los servidores de acuerdo con las reales órdenes.

El alcaide general no reconocía más jefe que el mayordomo mayor, de quien dependerá inmediatamente, por lo que todos los oficios de palacio estaban bajo su jurisdicción. En este sentido es preciso destacar que tenía a su cuidado la «policía interior del Palacio», institución fundamental en este período para descubrir los personajes partidarios de María Cristina y los contrarios. Ciertamente, la preocupación fundamental de la Reina Gobernadora consistía en tener seguridad de la fidelidad de la gente que ejercía los oficios de la Casa, lo que se agudizó a partir de los movimientos de la Granja<sup>2216</sup>. No resulta extraño que, el 14 febrero 1837, escribiera al Alcaide para que le informase de la lista de gente de la Casa referente a «su conducta moral y política». En consecuencia, muchos de ellos fueron despedidos como se demuestra en la «Lista de los cesantes clasificados procedentes de la Real Casa y Ramillete»<sup>2217</sup>.

Es más, la Reina Gobernadora obligaba a todos los servidores de la cocina a realizar el juramento de fidelidad a la Constitución de la Monarquía Española. Juan Gómez, Inspector de Boca y víveres del Real Palacio, certificaba de la actividad y de todos los servidores que la habían jurado: «Certifico: que los individuos dependientes de esta inspección de mi cargo, que se expresan a continuación, prestaron en mis manos el juramento de fidelidad a la constitución de la Monarquía Española, decretada y sancionada por las Cortes Constituyentes del año de 1837.

---

<sup>2215</sup> «Reglamento que presenta D. Francisco Carlos de Cáceres para la Alcaldía principal del Real Palacio y las demás dependencias que tiene a su cargo, mandado formar por Reales órdenes de 23 de enero y 7 de febrero de este año». Palacio 19 de marzo de 1838. AGP. Administración General, leg. 409.

<sup>2216</sup> Evaristo SAN MIGUEL: *Breves observaciones sobre los sucesos de agosto de 1836 y sus resultados*, Madrid. Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1838, pp. 6-8 y 14-19.

<sup>2217</sup> Madrid, 30 de enero 1837.

## Conclusión

En conclusión, durante la existencia de la Alcaldía, la Real Casa y Patrimonio experimentó numerosos cambios que hicieron variar su dependencia jerárquica. Entre 1834 y 1838 se mantuvo la Mayordomía como instancia superior, ya fuese en el ramo de etiqueta o en el económico-administrativo. No fue hasta este último año cuando se fijó el organigrama que predominó durante el resto del XIX, la separación de ambos ramos: el primero quedó encomendado al *Mayordomo mayor*, y el segundo, a una nueva figura de nuevo cuño, el *Intendente general* de la Real Casa y Patrimonio<sup>2218</sup>; pero además, durante este período se promulgaron todos los reglamentos «para la administración, gobierno, conservación y fomento de los Reales Sitios, Real Patrimonio, Casas de Campo, Reales palacios y demás posesiones, pertenencias y derecho de S. M. la Reina, Nra. S.<sup>a</sup>, D.<sup>a</sup> Isabel Segunda», lo que requiere un estudio que no resulta pertinente realizarlo en este trabajo<sup>2219</sup>.

Con todo, es preciso insistir en que el Alcaide pasó a depender, entre 1838 y 1852, del Mayordomo mayor y del Intendente general, en función de la materia de la que se tratase:

S. M. la Reyna Gobernadora se ha servido dirigirme con esta fecha el Real decreto siguiente: Queriendo yo que en lo sucesivo corran separadas y ejercidas por distintas personas las funciones de etiqueta y ceremonia de palacio y las económico-administrativas de la Real Casa, Patrimonio y todas sus dependencias, vengo en decretar lo siguiente: 1.º: El Mayordomo mayor, Sumiller de Corps y Caballerizo mayor no tendrán en adelante más facultades ni ejercerán más funciones que las concernientes a la etiqueta, ceremonia y servicio de las Reales Personas, así en la Cámara como fuera de Palacio con sujeción a lo que se estableciere en los reglamentos que para ello se formaren. 2.º: De las facciones económico-administrativas se encargará la persona que yo nombrare *con título de Intendente general de la Real Casa y Patrimonio*. 3.º: Con las de igual clase de la Reales Caballerizas y con entera dependencia de aquel, correrá el sujeto que con la denominación de director general de las Reales Caballerizas tuviere yo a bien nombrar. 4.º: La Junta de Gobierno de la Real Casa podrá en armonía con estas disposiciones los reglamentos de cuya formación esté encargada, así como los formados ya, que elevo a mis reales manos con consulta de 20 de mayo último, teniendo presentes en cuanto algunos de estos últimos las observaciones que acerca de ellos he hecho y de que estaréis enterado<sup>2220</sup>.

La *Alcaldía* mantuvo su importancia hasta la mitad del reinado de Isabel II, cuando los decretos de 24 de junio y 2 de agosto 1852 sancionaron la creación de dos nuevas oficinas, que suplieron a tan importante institución, con el fin de reforzar la división de funciones entre las funciones de etiquetas de la Casa y las de economía-administración del patrimonio real<sup>2221</sup>.

---

<sup>2218</sup> AGP, Administración General, leg. 466.

<sup>2219</sup> *Ibid.*, leg. 942.

<sup>2220</sup> AGP, Administración General, leg. 942 y leg. 466.

<sup>2221</sup> *Reales decretos expedidos por S. M. la Reina, nuestra señora, en 17 de julio y 2 de agosto de 1852 para el gobierno interior de su Real Casa*, Madrid, Aguado, impresor de la Cámara de S. M., 1852 (AGP, Administración General, leg. 942).